



Organizados en 32 comités de vivienda, vecinos de esa comuna de la Quinta Región llevan cerca de 17 años esperando una casa propia. Todas sus esperanzas se terminaron cuando vieron que el Minvu priorizó darles una solución a quienes usurparon terrenos en el cerro La Virgen antes que a ellos.

## Las 1.507 familias de San Antonio que el gobierno olvidó

Por Agustín Rojas y Juan José Leyton

**E**ste 24 de febrero, cuando se anunció el acuerdo entre el gobierno y los dueños de los terrenos que contienen la megatoma de San Antonio, el WhatsApp de Daniela Catalán (42) colapsó.

El grupo del comité de vivienda Los Aromos II se llenó de mensajes de vecinos molestos por el intento de regularización que estaba llevando el gobierno a cabo.

Los mensajes eran claros: "Salgamos a la calle, hagamos lo mismo que hicieron ellos para que así nos den una solución".

El desalojo de la megatoma decretado por la Corte Suprema, donde vivían más de 10 mil personas de manera irregular, se había suspendido. La creación de una comisión compuesta por el Ministerio de Vivienda, el Municipio de San Antonio y los dueños de los terrenos busca ayudar a que las familias que viven en el suelo usurpado compren en el mismo lugar donde armaron sus casas.

La molestia nació porque Catalán, junto a sus vecinos del sector de Llolleo, de San Antonio, llevan más de 10 años intentando dar con una solución habitacional por la vía regular.

-La gente está súper molesta. Dicen 'por qué a nosotros no y a las tomas sí'. Nosotros somos de San Antonio, las tomas tienen se-

gunda vivienda. La gente está desilusionada- cuenta Catalán.

El comité de vivienda Los Aromos II, que preside Daniela Catalán, lleva vigente oficialmente desde 2014, pero la mayoría de las 350 familias que lo componen llevan más tiempo esperando un hogar. Catalán, por ejemplo, lo hace desde 2008.

La presidenta del comité dice que se sienten engañados por el actuar del gobierno: específicamente, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A la fecha aún no les han dado solución al problema habitacional al que han postulado proyectos, juntado dinero y organizado comités con el fin de tener una vivienda propia.

El sentimiento que predomina es rabia e impotencia, dice la dirigente vecinal.

-Si les solucionan el problema, bien por ellos. Y me alegro, porque se ahorraron 10 años. Pero nosotros llevamos 10 años luchando para tener nuestras viviendas y aún no dan solución, encuentro que es injusto.

### Promesas rotas

Daniela Catalán es madre de cinco hijos y cesante. Vive en el sector de Tejas Verdes. Algunos meses al año trabaja vendiendo en la feria, donde, asegura, no genera más de \$ 200 mil mensuales. En 2008 quiso tener su propio hogar. Tenía 25 años. Deseaba

emigrar de la casa de su madre, en el centro de San Antonio, donde vivía con sus primeros tres hijos y abuela. Sus vecinos le contaron que la opción más viable era ser parte de un comité de vivienda.

Ese 2008 Catalán, junto a otras 40 familias, formaron un primer comité. El proyecto por el que se unieron había sido presentado por el Serviu y comprendía edificios en el sector de Placilla. Pero el terremoto del 27 de febrero de 2010 frustró el sueño. El terreno donde se levantarían las viviendas no estaba en condiciones para construir. Catalán también tuvo que mudarse a Llolleo.

Hasta 2014 no tuvieron ninguna solución a su problema habitacional. Ese año, junto a Paola Améstica, dirigente vecinal por aquel entonces y hoy concejala del PS en la comuna, formaron el comité de vivienda Los Aromos II. A ellas se sumaron 50 familias.

-Uno hace el comité y ahí el paso siguiente es juntar 20 familias. El grupo debe buscar una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) para ejecutar el proyecto y ahí esa entidad patrocinante trabaja con los comités y va armando el proyecto en conjunto con la gente- explica Améstica.

Según información de TECHO, hoy el tiempo de espera para conseguir una vivienda mediante comités ronda los 11 años. El panorama era aún más complejo para el

comité de Los Aromos II, dicen sus dirigentes, porque los proyectos escasearon. Aún así, Catalán recuerda las promesas que les hizo la encargada provincial del Serviu:

-Nos decía 'en dos años más va a estar todo listo y todos súper contentos. Al final no pasó nada. Después intentamos postular a un terreno que está acá en Llolleo, que es del Serviu. Estuvimos durante años en reuniones en Valparaíso y, al final, nos dijeron que no estaba habilitado-.

En todo este proceso, los vecinos debían contar constantemente en sus libretas de ahorro con aproximadamente \$ 1.500.000. Todo por un eventual proyecto. Alejandra Gahona (51) también es vecina del mismo comité que dirige Catalán: madre soltera y allegada en el hogar de su padre:

-Me he llegado hasta a disfrazar de mono para trabajar sacándome fotos con los niños para poder ir juntando la platita. Es difícil ahorrar en estas condiciones, pero uno junta cinco, seis, 10 lucas, lo que pueda.

En los últimos años el comité Los Aromos II se había robustecido: de los 50 miembros originales, pasaron a 350. Actualmente, este comité es uno de los 32 que existen en San Antonio: agrupan a 1.507 familias.

Para Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, hay un déficit de vivienda grave en San Antonio.

-En la región tenemos 374 campamentos, según el último catastro del Minvu. Y, probablemente, San Antonio sea el reflejo más nítido de ese drama que significa no tener vivienda propia- cuenta la autoridad.

Según datos del Servicio de Vivienda de Valparaíso, a 2022, en San Antonio existe una demanda de 12.990 hogares.

La problemática de construcción en la comuna podría deberse a varios factores: suelos no aptos, falta de espacio. Pero Marcelo Alfonsí, arquitecto encargado de gestión habitacional de la Municipalidad de San Antonio, apunta a un punto clave:

-Es nuestra burocracia la razón de por qué los proyectos particulares no avanzan en esta zona.

El arquitecto explica que la conformación de comités o la obtención de ciertos subsidios resulta un proceso lento y discriminatorio. Y que el ir y venir entre la entidad patrocinante, los beneficiarios y el Minvu termina aplazando los proyectos.

El problema no termina ahí. San Antonio cuenta con un historial de viviendas sociales fallidas. En 2010, tras el terremoto, los cinco edificios de Villa del Mar quedaron en condiciones inhabitables, por lo que fueron demolidos. En 2016, 150 casas en el sector de Mirador Altos de Bellavista también tuvieron que ser destruidas por no cumplir con los estándares de construcción. Mientras que en 2023, el conjunto habitacional Mirador El Faro I y II fue echado abajo por el Minvu porque los departamentos estaban mal contruidos. Esos vecinos aún no reciben su solución habitacional.

En octubre de 2019 la situación empeoró más. En medio del estallido social, miles de personas llegaron hasta el sector del cerro Centinela para asentarse de forma irregular en sus más de 160 hectáreas. Daniela Catalán aún recuerda lo que vio un día al revisar su muro en Facebook.

—Todos subían post y decían: ‘Hay que ir a tomarse este terreno, se están tomando el terreno de La Virgen’. Después, ‘se están tomando el terreno de Placilla’.

Catalán recuerda que, incluso, su hermano fue parte de los primeros asentamientos en la toma, pese a que después la abandonó. Por eso, ahora, ella quiere recalcar algo: nunca fue una opción seguir ese camino.

**Saltarse la fila**

Los primeros meses de interacción con los vecinos de la toma no fueron fáciles. Alejandra Gahona dice que, pese a que los intentaban entender, había un resentimiento:

—Comprendo que hay necesidades, que hay prioridades. Pero también pienso que no porque ellos se hayan tomado el terreno, nosotros vamos a quedar de lado. Porque si fuera por eso, nosotros estábamos desde mucho antes luchando por una vivienda.

Según Verónica Morales, dirigente de un sector bautizado como Fuerza Guerrera en la toma del cerro La Virgen, los vecinos de los comités, más que rabia, les transmiten arrepentimiento.

—Sienten como que no se atrevieron nunca, que perdieron el tiempo esperando que algún gobierno les diera solución habitacional. Se dieron cuenta de que, a lo mejor, si hubiesen tenido la gallardía y la valentía de haber buscado una solución habitacional por autogestión, de haber amarrado al gobierno para que los ayudara, quizá hace muchos años hubiesen solucionado su problema habitacional.

En 2020, el destino de los nueve comités que coordina Améstica, dentro de ellos el de Catalán, parecía haber cambiado: se les presentó un proyecto en Miramar de San Antonio. Emplazado en el sector de Altos de Placilla, suponía una solución habitacional

para 600 familias y, aunque no era el total de viviendas requeridas, parecía, al fin, un avance.

El proyecto reunió a siete comités diferentes, compuestos por 1.300 familias. Durante 2022, todo parecía ir según lo planeado. Ya a fines de diciembre de 2023, un oficio entre el gobernador Rodrigo Mundaca y el exdirector de Serviu de Valparaíso Rodrigo Uribe confirmaba la toma de conocimiento por parte de las autoridades del precio de los dos predios que se comprarían.

Con esa esperanza, los vecinos se reunieron meses más tarde, en el gimnasio de la Escuela España, con el gobernador regio-



► Daniela Catalán (arriba) y Esmeralda Díaz (abajo) son parte del comité de vivienda de San Antonio.

nal, la seremi de Vivienda y otras autoridades. El mensaje era claro: “La compra de terrenos va a ser ahora, este año. La plata ya está y está comprometida”, se le escuchó decir a Mundaca en un video que registró el encuentro.

Sólo que la compra nunca llegó. Otro oficio entre el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el exdirector del Serviu de Valparaíso, con fecha de diciembre de 2024, declinaba la compra.

El documento señalaba: “Para dar continuidad a los procesos de adquisición de los terrenos autorizados en el año 2024, que no fueron materializados en dicho periodo presupuestario, a través del presente informo a usted que la adquisición autorizada se ejecutará en el presente año presupuestario y se pagará con cargo al 10% de los recursos dispuestos en el año 2025 para la adquisición de terrenos del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda”.

La directora del Serviu de Valparaíso, Nerina Paz, explica las razones:

—Ese fue un reajuste de presupuesto que vino desde el Ministerio de Hacienda.

Las reacciones fueron inmediatas.

Esmeralda Díaz, presidenta del comité Mirador Alto El Valle, que también esperaba la compra de los predios, quedó molesta con esa decisión:

—Hace dos años que nos han estado mintiendo. Que sí, que se va a comprar el terreno, que esperen unos meses, que esperen otros meses.

El problema para Améstica, la concejala socialista, está en que estas promesas incumplidas de las autoridades incitan a que los vecinos rompan la ley para poder ser tomados en cuenta.

—Hay algunas personas que llevan esperando entre 12 y 15 años. La gente está aburrida, porque te uniste a un comité, ya que

dicen que postulando de esa manera la cosa sale más rápido. Pero al final todo ha resultado en lo mismo. (...) La desesperación ya es tanta, que tenemos vecinos que ya no aguantaron más y se tomaron un terreno.

Los vecinos apuntaron contra las autoridades. Entre ellas el gobernador:

—La verdad es que el argumento presupuestario no deja satisfechas a las personas que manifiestan su inconformidad por la falta de prolijidad y, finalmente, son las autoridades regionales las que terminan asumiendo el costo—indica Mundaca.

En algunas de estas reuniones que sostuvieron las autoridades y los vecinos, los comités de vivienda pudieron conocer a quienes dirigen las tomas de San Antonio. Catalán cuenta que la relación siempre ha sido cordial. Pero hoy miran con cierto resquemor la decisión que tomó el gobierno de ayudarlos a regularizar su situación y prevenir el desalojo del 27 de febrero.

Esta medida no solo la critican los vecinos. Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura UDD, ve el acuerdo como un salto de la institucionalidad.

—La gran crítica que se le hace a la forma en que el gobierno ha manejado el tema de la toma es que está desmantelando un sistema cuyo mérito es precisamente que la gente confía en que si postula y hace los trámites va a obtener su vivienda.

El gobernador Mundaca, que estuvo en contra del desalojo masivo del terreno usurpado, comparte que la solución no fue buena.

—Claro que es bastante injusto. Y, por tanto, lo que hemos dicho todas las autoridades es que no validamos la toma como un medio legal para poder acceder a la vivienda, cuando hoy día son tantas las personas que tienen ahorro previo y no han podido construir su vivienda.

Pamela Quiroz, una vecina del sector de Bellavista, ve un punto de quiebre luego de esta decisión del gobierno:

—Yo veo que nosotros tenemos que presionar de la misma forma como presionan los demás. Eso es lo que quieren que hagamos, porque resulta también que son sólo dos paños para 600 personas lo que pedimos. ¿Entonces, para dónde vamos? ¿Qué hacemos los que hemos postulado hace años? No pueden dejarlos afuera, es imposible.

El 27 de febrero, el mismo día en que debía realizarse el desalojo en San Antonio, a Daniela Catalán y a su comité les hicieron una última promesa.

—Tuvimos una reunión con el Serviu. Nos dijeron que en marzo iba a estar lista la compra del terreno, pero aún no pasa nada.

En algunos meses se cumplirán 17 años desde que Daniela Catalán inició el camino para un techo propio: seis más de los que normalmente se demoran los comités de vivienda en recibir una solución. Pero este viernes, en vez de regresar a su casa, Catalán tuvo que hacerlo al lugar donde lleva 15 años esperando, haciendo la fila, cuenta, mientras—dice—vive como gitana con sus hijos, confiando en un proceso que no sólo no ha premiado su paciencia, sino que, por el contrario, la ha castigado por eso.

—Nos sentimos olvidados en San Antonio—cuenta—, es como que no existimos. ●



► Durante el estallido social miles de personas llegaron a tomarse terrenos en los cerros de San Antonio.